



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-5

SESIÓN PÚBLICA NÚM. 61 ORDINARIA

JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del jueves veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no asistió a la sesión por desempeñar una comisión oficial.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número sesenta ordinaria, celebrada el martes veintisiete de junio del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del jueves veintinueve de junio de dos mil diecisiete:

I. 30/2013

Acción de inconstitucionalidad 30/2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 77 Bis, párrafos primero y tercero, y 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de trece de septiembre de dos mil trece. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso:

“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, segundo párrafo y, 77 Bis, párrafos primero —con la salvedad precisada en el punto resolutivo tercero de este fallo— y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la porción normativa que señala: “...con excepción de los del Poder Judicial del Estado...” CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su inciso A), denominado “Análisis del artículo 77 Bis, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa”.

El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero, en la porción normativa “con excepción de los del Poder Judicial del Estado”, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en razón de que el Congreso estableció una excepción, dentro del sistema de protección de derechos humanos, distinta de las previstas en el artículo 102, apartado B, constitucional, a saber: “con excepción de los del Poder Judicial de la Federación [...] Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”, por lo que la libertad configurativa de los congresos estatales debe estar limitada al texto constitucional.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en contra del proyecto porque, si bien el artículo 102, apartado B, constitucional prevé que “con excepción de los del Poder Judicial de la Federación [...] Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”, del proceso legislativo de reforma constitucional de dicho artículo se advierte que, en una primera intención, un partido político pretendió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuera competente tratándose del Poder Judicial de la Federación, es decir, en contra de los actos u omisiones de naturaleza



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público; sin embargo, en el debate correspondiente se privilegió la independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación, por lo que, en la votación final, la propuesta fue desechada y se estableció la exclusión del Poder Judicial de la Federación.

Agregó que el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, constitucional indica que “La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados”. Por tanto, y de una interpretación sistemática de los citados artículos 102 y 116 constitucionales, concluyó que, si bien no contiene la excepción expresa del Poder Judicial de los Estados, deben prevalecer los mismos principios que rigen la función jurisdiccional y que fueron suficientes para excluir al Poder Judicial de la Federación: autonomía, independencia e imparcialidad, para no aceptar la intromisión de las comisiones estatales de derechos humanos en los poderes judiciales locales.

Por esas razones, estimó que el precepto no resulta inconstitucional y, en consecuencia, votará en contra del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció de acuerdo con el proyecto, y sugirió matizar su párrafo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

treinta y nueve —y otros— que afirmen que se viola el artículo 1º constitucional, puesto que su diverso numeral 102 es expreso en cuanto a que las comisiones estatales de derechos humanos: “conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación”, lo que no da libertad de configuración a las entidades federativas para ampliar la excepción o limitar la competencia de las comisiones estatales de derechos humanos, para conocer de esos actos, porque fue una decisión del Constituyente excluir al Poder Judicial de la Federación.

Aclaró que esta excepción no podría ampliarse a supuestos distintos, porque al ser precisamente una excepción, debe ser de aplicación estricta y de interpretación restrictiva.

El señor Ministro Cossío Díaz concordó con la señora Ministra Luna Ramos en que, durante la reforma constitucional que diseñó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la razón por la que se excluyó al Poder Judicial de la Federación fue porque se partió de la tesis de que esta Suprema Corte —y, por ende, el Poder Judicial de la Federación— lleva a cabo la revisión constitucional del orden jurídico, por lo que se estimó que ningún órgano revisara los actos del órgano supremo de revisión constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Sin embargo, consideró que esa razón no le aplica al resto de los poderes judiciales estatales, independientemente de que puedan realizar un control difuso, pues básica o primordialmente son órganos de control de legalidad y, por esa razón, no se les excluyó expresamente.

Añadió que el sistema legislativo del Estado de Sinaloa es adecuado pues, si bien el artículo 77 Bis únicamente prevé que “con excepción de los del Poder Judicial del Estado”, la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa completa el modelo mediante sus artículos 8, fracción II, —“La Comisión Estatal no podrá conocer de los asuntos relativos a: [...] II. Resoluciones de carácter jurisdiccional”—, y 9 —“sólo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales cuando dichos actos u omisiones tengan carácter administrativo”—, lo cual coincide con la definición formal de Poder Judicial del Estado, prevista en el artículo 116, fracción III, constitucional, es decir, todos aquellos que realicen esta función. Por lo anterior, compartió la propuesta del proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz en que hay que atender el origen del esquema constitucional que regula a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; no obstante, la razón por la que se excluyó al Poder Judicial de la Federación del ámbito de la competencia de esa comisión es porque funciona con



base en sus principios de independencia y autonomía, lo que pudiera justificar que no se diera la posibilidad de que, vía quejas y denuncias de dicha comisión, se generase algún sistema de presión respecto de sus fallos, lo que se reflejó en el artículo 102, apartado B, constitucional: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos”.

Explicó que lo anterior, llevado al nivel local, no significaría que el legislador local creara un organismo de protección de los derechos humanos que excluya, por las mismas razones de autonomía e independencia, al Poder Judicial Local porque, si conforme al artículo 103, fracción I, constitucional: “Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”, difícilmente podría suponerse que esta atribución quedara encargada a otro órgano local.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por esa razón, señaló que la disposición impugnada, que excluye al Poder Judicial Local del ámbito de competencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es violatoria del artículo 102 constitucional, ya que únicamente excluyó del alcance de las actuaciones competenciales de las comisiones federal y local de derechos humanos al Poder Judicial de la Federación, por el ámbito y lugar que ocupa en el andamiaje constitucional, además de contar con un mecanismo interno de control de responsabilidades y seguimiento de denuncias en los supuestos de violaciones a derechos humanos por actuaciones administrativas. Por ello, compartió el proyecto, estimando que la interpretación que más debiera favorecer a las personas es aquella que dé la oportunidad a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga competencia para conocer de los actos administrativos que se den en el seno del Poder Judicial Local.

La señora Ministra Piña Hernández apuntó que el artículo 102, apartado B, constitucional, expresamente establece que “conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa [...] Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.

Recordó que, durante el procedimiento de reforma constitucional, hubo cuatro iniciativas: 1) la que preveía expresamente que era competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocer de cuestiones



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

administrativas del Poder Judicial de la Federación y de los Estados, 2) se eliminó lo anterior, y únicamente quedó que no era competente para el Poder Judicial de la Federación, 3) contemplaba a cualquier órgano del Poder Judicial Federal, y 4) establecía que no podía conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa o procedimental, sin hacer alusión al Poder Judicial Federal o a los poderes judiciales locales. Indicó que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se dijo que, en nuestra tradición constitucional, el Poder Judicial de la Federación siempre ha sido el garante de la protección jurídica de los derechos fundamentales del gobernado, razón por la cual se le excluyó del ámbito del conocimiento de las comisiones de derechos humanos.

Recalcó que sólo una de las iniciativas propuso la participación de los órganos de derechos humanos en la recepción de quejas en contra del Poder Judicial de la Federación y de los estados, pero el dictamen lo excluyó expresamente de su ámbito de conocimiento, pese a que algunos diputados y senadores manifestaron su desacuerdo al respecto.

Por ello, se inclinó a aceptar la propuesta del proyecto por dos razones: 1) porque esa fue la intención del Constituyente expresamente, tras analizar si se debía incluir o no al Poder Judicial de la Federación, y llegó al convencimiento de excluir únicamente al Poder Judicial de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Federación, no así a los poderes judiciales de los Estados, y 2) porque estos organismos pretenden proteger los derechos humanos, por lo que excluir de su conocimiento cuestiones netamente administrativas, no electorales ni jurisdiccionales, resultaría en detrimento de los derechos humanos de los gobernados. En consecuencia, optó por la interpretación del proyecto.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek sostuvo el proyecto. Reconoció que, al momento de elaborarlo, se enfrentó a dos dificultades: 1) la literalidad del texto constitucional, y 2) la evolución legislativa que precisó la señora Ministra Piña Hernández.

Modificó el proyecto para agregar el argumento de racionalidad constitucional apuntado por el señor Ministro Cossío Díaz, a saber, por qué el Poder Judicial de la Federación, como órgano terminal garante de la protección constitucional de los derechos humanos, frente a los demás poderes y órganos constitucionales autónomos, no puede ser objeto de quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos, incluso por su actuación en el ámbito administrativo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su inciso A), denominado “Análisis del artículo 77 Bis, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa”, consistente en declarar la invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero, en la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

porción normativa “con excepción de los del Poder Judicial del Estado”, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la cual se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra y anunció voto particular. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. La señora Ministra Piña Hernández reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su inciso B), denominado “Análisis de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, en relación con el 77 Bis, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa”.

El proyecto propone reconocer la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, y 77 Bis, párrafos primero —salvo su porción normativa “con excepción de los del Poder Judicial del Estado”— y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en razón de que el primer precepto prevé que “Lo anterior, a solicitud del Presidente de ese organismo y previo Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno”, y el segundo que “Todo servidor público está obligado a responder las



recomendaciones que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar, y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado, a solicitud del Presidente de ese organismo y previo Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno, podrá llamar, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichas Comisiones Permanentes a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”; siendo que la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once tuvo como objetivo dotar de mayor fuerza a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estableció su obligación de fundar y motivar la negativa y hacerla pública, con lo que se creó un sistema de auditoria social de las negativas, así como la facultad de su presidente de solicitar al Congreso ordenar la comparecencia de las autoridades, en caso de negativa; el proyecto también considera que ese trabajo parlamentario corresponde tanto a nivel federal como a las entidades federativas, y que el texto constitucional no señala que, en automático y una vez que haya una solicitud del *ombudsman*, tengan los congresos que hacer comparecer de manera imperativa a los funcionarios correspondientes, puesto que todas las leyes orgánicas de los congresos estatales prevén que todo asunto que ingrese debe pasar a las comisiones para la elaboración de un dictamen previo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que se somete al Pleno, el que decidirá citar o no para que las autoridades comparezcan.

El señor Ministro Pérez Dayán suscribió el proyecto, pues los preceptos inciden en el trabajo legislativo y, en el caso del Congreso del Estado de Sinaloa, trabaja a través de comisiones, procurando un conocimiento muy particularizado de quienes las integran, lo que depura y agiliza el trabajo que será sujeto a la Asamblea, por lo que ese congreso no estaría obligado, por la mera solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a hacer comparecer a la autoridad que no ha acatado alguna de sus recomendaciones, sino que queda total y absolutamente a la discreción del órgano legislativo, además de que esa condición no viola ninguna disposición constitucional.

Sugirió que en el párrafo sesenta del proyecto se agregara la mecánica a través de la cual funcionan las comisiones de los congresos de los Estados, y precisar el sentido de que la solicitud de comparecencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe pasar por una comisión previamente y, con independencia de su determinación, ser sometida al Pleno del Congreso del Estado, el que tendrá la última palabra para determinar si es o no procedente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su inciso B), denominado "Análisis de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

relación con el 77 Bis, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa”, consistente en reconocer la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, y 77 Bis, párrafos primero —salvo su porción normativa “con excepción de los del Poder Judicial del Estado”— y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán con precisiones y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el considerando sexto, relativo a los efectos de la sentencia. El proyecto propone determinar que la declaratoria de invalidez surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa.

El señor Ministro Pérez Dayán consultó qué pasaría con los procedimientos que se hubieren abierto con fundamento en una disposición inconstitucional, y si esto pudiera mencionarse o no en el texto de la sentencia para salvaguardar los derechos humanos de los potenciales afectados, aun cuando no se trate de una norma penal.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek estimó que no es necesario porque no se trata de un sistema jurisdiccional de protección de derechos humanos, y que la sanción es la auditoría social o, en su caso, la elaboración



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de una recomendación. Entonces, valoró que los efectos pueden darse como establece el artículo 105 constitucional.

El señor Ministro Pérez Dayán se expresó conforme con la explicación.

La señora Ministra Luna Ramos anunció voto en favor de los efectos de la declaración de la invalidez, pero vencida por la mayoría.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, relativo a los efectos de la sentencia, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos vencida por la mayoría, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, y 77 Bis, párrafos primero —con la salvedad indicada en el resolutivo tercero de este fallo— y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, contenidos en el Decreto número 903, publicado en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil trece. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero, en la porción normativa ‘con excepción de los del Poder Judicial del Estado’, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, contenido en el Decreto número 903, publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil trece. CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutive de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutive, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:



Acción de inconstitucionalidad 42/2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 58, párrafo tercero, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, reformados mediante Decreto 972, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de noviembre de dos mil trece. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 58, tercer párrafo, inciso a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa, reformados mediante Decreto 972 publicado en el Periódico Oficial de la entidad mencionada de veintisiete de noviembre de dos mil trece. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo. El proyecto propone reconocer la validez de los artículos 58, párrafo tercero, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa, en razón de que la impugnación de la accionante se relacionaba estrechamente con las reformas constitucionales analizadas en la acción de inconstitucionalidad 30/2013, en torno al procedimiento legislativo para ordenar la comparecencia de las autoridades, de la cual se reconoció su validez, por lo que debe ser congruente esta resolución con aquella.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, consistente en reconocer la validez de los artículos 58, párrafo tercero, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 58, párrafo tercero, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa, reformados mediante Decreto 972, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veintisiete de noviembre de dos mil trece. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cincuenta minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a una sesión



Sesión Pública Núm. 61

Jueves 29 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

privada, tras concluir esta sesión pública, así como a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes tres de julio del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN